

SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA

Alfredo Pastor

La mayoría de los países europeos —entre ellos España— está atravesando una crisis económica profunda, que se refleja en una caída importante de las tasas de crecimiento y un empeoramiento notable del empleo. Además, la debilidad de la actividad económica está afectando también negativamente a las cuentas del sector público, que, al tener que soportar menores ingresos y mayores gastos, están registrando unos déficit muy elevados, mayores que los observados, por ejemplo, a mediados de la década anterior. Desde mediados del pasado año, sin embargo, se está asistiendo a una estabilización de la situación económica, al tiempo que se advierten síntomas de recuperación cada vez más robustos. En España, este relanzamiento de la actividad se detecta sobre todo en el sector exterior, que, históricamente, ha sido la base sobre la que se han cimentado los procesos de recuperación económica.

Más allá del componente cíclico inherente a toda fase de depresión económica, la presente recesión responde a una serie de factores estructurales que es importante comprender. Destaca así, en primer lugar, el proceso de unificación alemana emprendido a partir de 1991, que, en la práctica, se ha traducido en un *shock* deflacionista importante para aquellos países europeos que, ya sea en el marco del Sistema Monetario Europeo o fuera de él, tienen ligada la paridad de su moneda al marco alemán. La integración creciente de los mercados internacionales de capitales facilita una transmisión más rápida entre países de los *shocks* monetarios y limita la capacidad de la política económica, sobre todo la monetaria, para amortiguar las fluctuaciones cíclicas. En segundo lugar existen por lo menos otros dos factores que, actuando por el lado de la oferta, están teniendo, ya desde los años ochenta, un efecto depresivo notable sobre las economías europeas. Tanto la creciente competencia de los llamados «nuevos países industrializados» en ciertos sectores industriales tradicionales (textil, siderurgia, etc.) como el proceso de reforma de la agricultura en general y de la Política Agraria Común en particular (forzado también por la competencia externa) están

forzando un doloroso proceso de ajuste, en busca de una redefinición de la ventaja comparativa de las economías europeas. Con la vista puesta en el medio plazo, es posible que la integración a los mercados internacionales de los países de Europa del Este acentúe todavía más ese proceso de reestructuración productiva.

Es importante que todos los agentes económicos (trabajadores, empresarios y gobierno) reconozcan el carácter mayoritariamente estructural de estos cambios, puesto que sólo desde un planteamiento de partida realista será posible articular respuestas adecuadas. En la medida en que los cambios apuntados son, en gran parte, inevitables, la estrategia más inteligente —la única posible a largo plazo— pasa por tratar de aprovecharlos a nuestro favor, creando las condiciones que estimulen una rápida adaptación a los mismos. Intentar oponerse u obviar el nuevo contexto externo que nos rodea no sólo retrasaría la vuelta a una fase de crecimiento económico en nuestro país, sino que, además, al contribuir a perpetuar, o incluso a agravar, la situación actual de desempleo, sería una salida socialmente muy insolidaria.

Ante esta situación, el objetivo básico del gobierno es crear un marco de confianza para la recuperación de la inversión privada, puesto que ello constituye una condición indispensable para la vuelta a una senda de crecimiento y de creación de empleo. En la práctica, ello pasa por una estrategia que se define a partir de tres vectores:

- Primero, tratar de reforzar la estabilidad macroeconómica a partir de una política fiscal más disciplinada. Así, ya en 1994 se contempla una reducción del déficit público cercana al medio punto de PIB: un objetivo en apariencia modesto, pero que, dado el impacto todavía adverso del ciclo económico, esconde esfuerzos estructurales de contención notables. Pero acaso todavía más importante sea la decidida voluntad del gobierno de sostener este esfuerzo fiscal en el tiempo, en el convencimiento de que sólo desde el medio plazo resulta po-

sible construir una estrategia creíble de consolidación fiscal.

- Segundo, mejorar la capacidad de competir de la economía española, asegurando que nuestras empresas disfrutaran de unas condiciones de partida similares a las de sus competidores europeos. La reforma del mercado de trabajo puesta en marcha recientemente por el gobierno es un primer paso en esta dirección. La reforma, todavía en estudio, de las telecomunicaciones y de otros sectores, principalmente en el campo de los servicios, deben servir también al objetivo de mejorar la competitividad y, en última instancia, el nivel de bienestar de nuestro país.

- Tercero, mejorar los canales de comunicación con los distintos agentes sociales, con el fin de mejorar el clima de confianza en nuestra economía y facilitar así la toma colectiva de decisiones. Aunque en este campo el protagonismo principal corresponde a sindicatos y patronal, el gobierno ha propuesto —hasta el momento con poco éxito— un acuerdo de rentas a tres años que, al moderar el crecimiento de salarios y beneficios, permita una recuperación más rápida del empleo, contribuyendo así a un reparto más equitativo de los costes de la crisis entre empleados y parados.

La validez de la estrategia puesta en marcha por el gobierno queda reforzada por la estabilidad que ha mantenido la paridad de la peseta —sin intervenciones por parte del Banco de España— desde la ampliación de la bandas de fluctuación el pasado 2 de agosto, que ha sido compatible con importantes descensos de los tipos de interés, superiores incluso a los registrados en otras economías europeas. No debe olvidarse, sin embargo, que las facultades del gobierno en materia económica son limitadas y que, más allá de la definición de un marco estable de actuación, es al conjunto de agentes económicos a quienes corresponde asegurar la buena marcha de la economía española.